

**Consideraciones sobre la protección internacional de  
los solicitantes de asilo y los refugiados colombianos**

**Ginebra, Septiembre de 2002**



**UNITED NATIONS** HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES  
ALTO COMISIONADO DE **NACIONES UNIDAS** PARA LOS REFUGIADOS

# Consideraciones sobre la protección internacional de los solicitantes de asilo y los refugiados colombianos

## Índice

<b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>II. ANTECEDENTES .....</b>	<b>3</b>
1. <i>Información general sobre Colombia.....</i>	<i>3</i>
2. <i>El contexto político y los actores.....</i>	<i>3</i>
3. <i>La situación de seguridad y de derechos humanos .....</i>	<i>8</i>
4. <i>La situación socio-económica y humanitaria .....</i>	<i>11</i>
5. <i>El desplazamiento interno .....</i>	<i>12</i>
<b>III. GRUPOS EN RIESGO .....</b>	<b>14</b>
A. COLOMBIANOS CON TEMORES FUNDADOS DE PERSECUCIÓN POR MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO I A DE LA CONVENCIÓN DE 1951 .....	14
1. <i>Introducción.....</i>	<i>14</i>
2. <i>Las personas que apoyan o se presume que apoyan a las partes en conflicto .....</i>	<i>15</i>
3. <i>Los antiguos miembros de las partes en conflicto .....</i>	<i>16</i>
4. <i>Las autoridades municipales y departamentales.....</i>	<i>17</i>
5. <i>Las personas relacionadas con la administración de justicia.....</i>	<i>17</i>
6. <i>Los activistas de derechos humanos.....</i>	<i>18</i>
7. <i>Los líderes sindicales.....</i>	<i>18</i>
8. <i>Las personas con un alto perfil público/comunitario.....</i>	<i>19</i>
9. <i>Los periodistas.....</i>	<i>20</i>
10. <i>Los indígenas y los afrocolombianos.....</i>	<i>20</i>
11. <i>Personas que pertenecen a grupos sociales marginados .....</i>	<i>21</i>
B. LOS COLOMBIANOS QUE REQUIEREN PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEBIDO A LA FALTA O CARENCIA DE PROTECCIÓN NACIONAL. ....	21
<b>IV. LAS CLÁUSULAS DE EXCLUSIÓN.....</b>	<b>22</b>
<b>V. ALTERNATIVA DE HUIDA INTERNA .....</b>	<b>23</b>

## **I. Introducción**

El conflicto colombiano se ha deteriorado en forma significativa durante los últimos tres años. Esta situación ha incrementado el desplazamiento interno y los movimientos de refugiados hacia países vecinos y otras partes del mundo. El número, cada vez más alto, de colombianos que solicita asilo en los países vecinos, en América Central, en América del Norte y en Europa, y cuyos variados perfiles reflejan la complejidad de la situación colombiana, aunado a lo difícil que resulta la evaluación de estas solicitudes de asilo en un contexto que evoluciona rápidamente, hace que sea necesario contar con directrices en materia de elegibilidad.

## **II. Antecedentes**

### **1. Información general sobre Colombia**

1. Colombia está dividida administrativamente en 32 departamentos, más el distrito de Bogotá, que es la capital. Cada departamento está constituido por varias municipalidades, las cuales suman 1.098 en todo el país. Las autoridades admiten que 192 municipalidades no cuentan con la protección de los cuerpos de seguridad gubernamentales.

2. Según estimaciones del año 2001, Colombia cuenta con unos 40.3 millones de habitantes. La mayor parte de la población (60%) es *mestiza* (mezcla de razas), pero existe una proporción importante de minorías de origen europeo (20%) y africano (18%). Las comunidades indígenas representan un 2% de la población.

3. La población es mayoritariamente urbana; cerca del 30% vive en las cuatro principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Las ciudades intermedias, con poblaciones que superan los 250.000 habitantes, se localizan, en general, alrededor de estos centros regionales. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en diez años, la población urbana aumentó en un 4%: pasó de un 70% en 1990 a un 74% en el 2000. Dicho Departamento considera que este incremento refleja, no solo un cambio estructural en dirección opuesta a la agricultura, sino también el hecho de que la violencia —de la guerrilla y de los paramilitares— ha forzado a las familias de las zonas rurales a buscar protección en pueblos y ciudades (ver información más amplia en la sección de “*Desplazamiento interno*”).

### **2. El contexto político y los actores<sup>1</sup>**

4. La escena política colombiana ha estado dominada por dos partidos políticos rivales, el Partido Social Conservador (PSC) y el Partido Liberal (PL)<sup>2</sup>, y se caracteriza por la violencia organizada y la debilidad del Estado. Durante la época de la Violencia (1946-1958), los choques entre ambos partidos dejaron un saldo de 300.000 muertos políticos. En este período, los comunistas y los liberales se organizaron en grupos de autodefensa, y este fue el preludio de los grupos rebeldes que aparecieron posteriormente, con el fin de oponerse a las fuerzas conservadoras.

---

<sup>1</sup> Esta sección se basa fundamentalmente en el Informe, “*Colombia: la esquiwa búsqueda de la paz*”, Grupo Internacional Crisis (ICG), Informe Latinoamericano No. 1, del 26 de marzo.

<sup>2</sup> En general, los conservadores apoyan un gobierno centralista, cambios económicos y políticos lentos, y están muy influenciados por la Iglesia Católica, mientras que los liberales se inclinan por el sistema federal, el libre comercio y abogan por los intereses de los votantes urbanos de bajos recursos, tal como se señala en el Perfil de país (Colombia), Unidad de Inteligencia, Economist, 2001, p. 4.

En 1958, los dos partidos alcanzaron el poder mediante un acuerdo mutuo, el cual ofrecía un gobierno de Frente Nacional con una presidencia rotativa y cargos gubernamentales compartidos. Debido al fuerte apoyo rural y a los contactos con los políticos locales de ambos partidos, los insurgentes rurales no fueron totalmente derrotados por el Gobierno, y, con el tiempo, se transformaron en ejércitos campesinos opuestos a la desigualdad social y a la concentración de la tenencia de la tierra<sup>3</sup>.

5. La aparición de los carteles de la droga a fines de la década de 1970 y principios de 1980 transformó tanto a la sociedad colombiana como la naturaleza del conflicto civil. La corrupción generalizada y de alto nivel, la intimidación y los asesinatos debilitaron al gobierno, particularmente al aparato encargado de aplicar la ley, y minaron la influencia de los partidos políticos tradicionales. Como el gobierno perseguía a los carteles de la droga, las *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)* y los grupos paramilitares se concentraron, cada vez más, en el cultivo, el procesamiento y el tráfico de drogas. Esto les permitió obtener dinero para financiar el reclutamiento y el armamento, así como para independizarse del Partido Comunista y de los grandes terratenientes.

6. Entre 1982 y 1998, se hicieron muchos esfuerzos por negociar la paz, pero las conversaciones, a menudo, iban acompañadas de una escalada en la lucha armada, y los esfuerzos por transformar las organizaciones guerrilleras en entidades políticas fueron respondidos con violencia. Por ejemplo, entre 1990 y 1994, la mayoría de los miembros de los dos grupos guerrilleros, el *Movimiento 19 de Abril (M-19)* y el *Ejército Popular de Liberación (EPL)* se desmovilizaron y se formó un partido de coalición para participar en las elecciones de 1990. Si bien el apoyo electoral fue significativo, los grupos paramilitares y las fuerzas locales de seguridad identificaron como objetivos a muchos ex-guerrilleros para ejecutarlos. Las FARC, que es el grupo guerrillero más grande, estuvo involucrado en varios intentos —fracasados— para negociar la paz; tales intentos tuvieron lugar entre 1984 y 1987, en 1991 y en 1992. Durante el primer proceso de paz, que incluía un cese al fuego, las FARC formaron un partido político, la Unión Patriótica, el cual participó en las elecciones de 1986, y obtuvo un apoyo importante. Sin embargo, entre 1985, año en que se fundó la Unión Patriótica, y principios de los noventa, por lo menos 3.000 miembros de los partidos representados en el Congreso, alcaldes, activistas y candidatos, incluidos dos candidatos a la Presidencia, fueron asesinados por los paramilitares, las fuerzas de seguridad y los carteles de la droga<sup>4</sup>. Los asesinatos a gran escala de los miembros de la Unión Patriótica dejaron la estructura militar de las FARC intacta, pero el grupo quedó con pocos voceros políticos articulados. Dichos asesinatos fueron, además, como una advertencia para los grupos rebeldes que consideraban la posibilidad de una participación política no violenta.

7. En junio de 1998, Andrés Pastrana, del Partido Conservador, ganó las elecciones para Presidente con la promesa de negociar la paz. En julio de 1998, siendo Presidente electo, el señor Pastrana se reunió con el comandante de las FARC, Manuel Marulanda, y el jefe militar de dichas fuerzas, Jorge Enrique Briceño, alias el “Mono Jojoy”. Así, se estableció la *Zona de Despeje* o zona desmilitarizada (DMZ), la cual comprendía cinco municipalidades en los departamentos de Caquetá y Meta, para un total de 42.129 Kilómetros cuadrados (aproximadamente el tamaño de Suiza). La idea era tener un área neutral en donde el Gobierno y la guerrilla pudieran negociar la paz. La zona desmilitarizada, una de las demandas fundamentales de las FARC, fue creada originalmente por un

---

<sup>3</sup> En 1964, un promedio de 100 grupos armados estaban activos en Colombia, sobre todo en las zonas cafeteras. “*Colombia: la esquivo búsqueda de la paz*”, ICG, p. 3; ver también Estudio de país de Colombia, EIU, p. 4-5.

<sup>4</sup> “*Colombia: la esquivo búsqueda de la paz*”, p. 6.

período de 90 días. El control de la zona por las FARC se extendió once veces hasta febrero de 2002, a pesar del estancamiento en las conversaciones de paz.

8. Pese a su participación formal en las negociaciones, las FARC continuaban atacando pueblos y secuestrando ciudadanos, empleados públicos y aviones, y, además, asesinando a funcionarios del Gobierno. Los paramilitares también continuaban con su estrategia de asesinar a cualquier ciudadano sospechoso de simpatizar con los grupos de izquierda. Según varias fuentes, entre ellas el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNHCHR), la zona desmilitarizada se empleaba para ocultar a las víctimas de los secuestros y los bienes robados, para los entrenamientos militares y para el procesamiento de la coca<sup>5</sup>. En octubre de 2001 se suspendieron las negociaciones, pues las FARC objetaban el reciente anuncio del gobierno de ejercer un mayor control en la zona desmilitarizada. Dicho control, destinado a poner fin a los abusos que se cometían en la zona, incluía vigilancia aérea y puestos de control en los puntos de entrada. En enero de 2002, el Presidente Pastrana cuestionó el compromiso de las FARC con el proceso de paz y les dio un plazo de 48 horas para evacuar la zona. Un acuerdo de última hora por parte de las FARC para aceptar una mediación internacional, así como la intervención de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y diplomáticos extranjeros dio como resultado una extensión de la zona desmilitarizada hasta el 10 de abril de 2002 y un calendario para lograr más avances en el marco de la paz, pero no una tregua inmediata. Los ataques de las FARC contra la infraestructura y los civiles no sólo continuaron, sino que se intensificaron, y entre ellos figura el plagio bien organizado del senador Eduardo Gechem, Presidente de la Comisión de Paz del Senado, ocurrido el 20 de febrero de 2002. Un día después, las fuerzas armadas de Colombia fueron enviadas a la zona desmilitarizada.

9. En mayo de 2002, Alvaro Uribe, un candidato independiente apoyado por el PSC, ganó las elecciones gracias a su propuesta, ampliamente apoyada, de buscar opciones militares para combatir a la guerrilla<sup>6</sup>. Durante la toma de posesión, las FARC lanzaron una granada y un ataque de mortero en el centro de Bogotá, dejando como saldo 20 muertes. El bombardeo fue interpretado como una confirmación de la capacidad de las FARC para proyectar la violencia en los centros urbanos, a pesar de que se habían tomado precauciones de seguridad sin precedentes.

10. El Presidente Uribe respondió declarando el estado de emergencia por los siguientes 90 días y anunciando un impuesto sobre los bienes de la clase alta, a fin de obtener más recursos para luchar contra la guerrilla y los paramilitares. El gobierno intenta recaudar \$780 millones a través del cobro —a personas y compañías— de un 1.2% de impuesto sobre los bienes que sobrepasan los \$60.000. El estado de emergencia permite al Presidente Uribe legislar por decreto y restringir los derechos civiles<sup>7</sup>, aunque el gobierno afirmó que no haría tal cosa a menos que fuera necesario. Conocido como “estado de conmoción interior”, el estado de emergencia también fue una respuesta

---

<sup>5</sup> Informe de la Oficina del ACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, del 28 de febrero de 2002 (E/CN.4/2002/17), párrafo 198.

<sup>6</sup> El eslogan de campaña del Presidente Uribe era “Mano firme, corazón grande”. Las conversaciones de paz sostenidas durante la administración del Presidente Pastrana se llevaron a cabo en medio de un conflicto armado permanente, mientras que, según los comunicados de prensa, el Presidente Uribe pedía un alto al fuego y un cese a los “actos terroristas” de las FARC, como condición previa para reanudar las negociaciones. Sin embargo, las FARC, según se informa, consideran que un cese al fuego sería el resultado, no el comienzo, de un nuevo diálogo con el gobierno.

<sup>7</sup> El estado de emergencia le otorga al gobierno el poder de limitar el movimiento de las personas, imponer restricciones a los medios de comunicación, allanar viviendas sin autorización previa y arrestar a cualquier sospechoso, en lugar de tener que probar primero que cometieron un crimen. **Nota del traductor:** De conformidad con el artículo 214 inciso 2 de la Constitución Política de Colombia: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales”.

a la campaña de amenazas de muerte emprendida por las FARC contra los alcaldes del país y los funcionarios locales. Además, de aumentar las filas de soldados y policías, el Presidente Uribe intenta crear una red de 100.000 civiles “policías auxiliares”, para que actúen como informantes desarmados, una táctica que utilizó cuando era gobernador.

**11. FARC:** las FARC-EP (*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo*), fundadas en 1965, se han convertido en la organización guerrillera más grande y activa de Colombia. Surgidas a partir de los grupos de autodefensa que se formaron en la “época de la Violencia”, las FARC eran, en un inicio, un ejército campesino de ideología comunista y dominado por el Partido Comunista. Cuando se dio el colapso de la Unión Soviética en 1991, ya las FARC se habían distanciado del Partido Comunista, y habían ganado apoyo en los centros urbanos, atrayendo estudiantes, intelectuales y trabajadores. Con el dinero obtenido con los secuestros, la extorsión y la venta de protección a narcotraficantes y cultivadores de coca, las FARC lograron ampliar el número de sus partidarios, sus reservas financieras y el control del territorio. Los motivos militares y políticos opacan ahora su agenda política y social, que incluye temas como la tenencia de la tierra y la reforma política. Su participación en los cultivos ilícitos, el narcotráfico y el secuestro, les ha producido ingresos que rondan los \$500 millones al año. Por ello, las FARC pueden proyectar su capacidad militar a casi todo el país, y se ha observado un incremento en sus actividades en los centros urbanos. Su poderío actual se estima en 17.000 combatientes, organizados en siete *bloques* regionales y constituidos por 60 *frentes*. El comandante en jefe de las FARC es Manuel Marulanda Velez, alias “*Tirofijo*”. En la actualidad las FARC cuentan con un apoyo popular mínimo en Colombia, debido a su percibida falta de compromiso con los asuntos ideológicos y a la violencia indiscriminada contra los civiles.

**12. ELN:** La segunda organización guerrillera más grande del país es el *Ejército de Liberación Nacional*, fundado en 1964 por estudiantes universitarios influenciados por la revolución cubana y, en particular, por el pensamiento del “Che” Guevara. Los informes sugieren que las disputas internas y las bajas militares han debilitado de manera considerable al ELN<sup>8</sup>. La organización se revitalizó a principios de la década de 1980, con la llegada de un nuevo dirigente, el cura español Manuel Pérez, quien fortaleció los lazos con los movimientos sociales y con los sindicatos del sector petrolero, y extorsionó a las compañías petroleras extranjeras<sup>9</sup>. Actualmente, el ELN está compuesto por un total de 4.500 combatientes al mando de Nicolás Rodríguez, y está organizado en cinco *bloques* y 141 *frentes*, con mayor presencia en los departamentos norteños de Santander, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia y Arauca. Tradicionalmente, el ELN se ha dedicado a atacar y sabotear las instalaciones de las compañías petroleras y mineras (sobre todo en Arauca y Norte de Santander), y la mayor parte de sus finanzas proceden de la extorsión y el secuestro, sobre todo en Antioquia. Aunque ahora dicen apoyar la paz, el progreso en este sentido se ha visto interrumpido, en parte, por la violencia ejercida por el ELN durante las negociaciones. A principios de este año, durante las conversaciones sostenidas en La Habana, Cuba, entre el Presidente Pastrana y el ELN se llegó a un acuerdo sobre un cronograma para establecer un alto al fuego, y se propuso una agenda para llevar a cabo conversaciones más generales. No se sabe a ciencia cierta si la nueva administración será capaz de revitalizar estas negociaciones, que permanecen interrumpidas desde junio de 2002. En la actualidad, el ELN, al igual que las FARC, cuenta con un apoyo popular

---

<sup>8</sup> Jane’s Sentinel Security Assessment, Suramérica, 11, Resumen Ejecutivo, Grupo de información de Jane, 24 de junio de 2002. Ver también, “*Colombia: la esquivo búsqueda de la paz*”, p. 4.

<sup>9</sup> Ibid.

minoritario<sup>10</sup>, como consecuencia de sus actividades terroristas y delictivas, que casi siempre afectan a la población civil de manera indiscriminada.

**13. Otras organizaciones guerrilleras:** según el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América<sup>11</sup>, durante el 2001, las FARC y el ELN, así como otros grupos más pequeños llevaron a cabo ataques armados en casi 1.000 de las 1.098 municipalidades del país. Los grupos guerrilleros más pequeños son de naturaleza más regional, y entre ellos figuran: el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Frente Jaime Bateman Cayón, el Ejército Revolucionario Guevarista, el Ejército Revolucionario Popular, y otros. La información sobre la dirigencia, la ideología y las actividades de estas organizaciones se encuentra, *inter alia*, en la página web, United Kingdom Home Office [www.ind.homeoffice.gov.uk](http://www.ind.homeoffice.gov.uk).

**14. Grupos paramilitares de autodefensa**<sup>12</sup>: las organizaciones paramilitares surgieron a principios de 1980, inicialmente para proteger a los grandes terratenientes y a los cabecillas de la droga contra la guerrilla, que los tenía en la mira de los secuestros y la extorsión<sup>13</sup>. El grupo más grande, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) surgió a principios de la década de 1990, como resultado de una fusión de los paramilitares y los grupos establecidos por los militares para actuar como escuadrones de la muerte<sup>14</sup>. Encabezados por los hermanos Carlos y Fidel Castaño, entrenados como dirigentes de los escuadrones de la muerte<sup>15</sup>, las ACCU son el núcleo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo “sombrilla” liderado por Carlos Castaño y constituido alrededor de 1997. Entre 1992 y 2001, el número de combatientes de las AUC aumentó de 850 a unos 8.000.

**15.** Haciendo gala de una enorme brutalidad hacia la población civil, el grupo ha “asesinado, torturado y amenazado a todos los civiles sospechosos de simpatizar con la guerrilla, como parte de una campaña destinada a aterrorizarlos para obligarlos a abandonar sus hogares”, en un esfuerzo por reemplazar el control que tienen los rebeldes sobre las plantaciones de coca y los territorios estratégicos<sup>16</sup>. Al igual que la guerrilla, este grupo ha participado en secuestros y extorsiones. Además de una presencia permanente en toda la región norte de Colombia, a finales de la década de 1990, las AUC empezaron a incursionar en el sur de Colombia, en las áreas de cultivo de coca controladas por las FARC. Si bien, en noviembre de 2001, las AUC proclamaban la inclusión de actividades políticas y sociales en su agenda, muchos observadores veían a los paramilitares como

---

<sup>10</sup> En un sondeo de Gallup realizado en diciembre de 2001, menos del 3% de los colombianos tenían una opinión favorable de las FARC, el grado de aprobación del ELN era casi nulo y el grupo paramilitar AUC recibió casi un 10%, según se indica en “*Colombia: la esquiwa búsqueda de la paz*”, p. 9.

<sup>11</sup> Departamento de Estado de los EE UU, Informe de país de Colombia sobre las prácticas de derechos humanos, 2001, p. 20.

<sup>12</sup> Las instituciones nacionales prefieren el término “autodefensas” o fuerzas de “autodefensa”.

<sup>13</sup> El crecimiento de las organizaciones paramilitares coincide con el advenimiento del comercio de la droga en Colombia. En la década de los ochenta, los traficantes más ricos lavaron sus ganancias comprando hasta 2.5 millones de acres de tierra en el norte de Colombia. Los nuevos terratenientes reunieron ejércitos privados para combatir a la guerrilla, que secuestraba y extorsionaba a los rancheros más ricos del área. Uno de los primeros grupos, y uno de los más temidos, fue un grupo fundado por el cartel de Medellín, que se hacía llamar a sí mismo “Muerte a los Secuestradores” (MAS) y que actuaba en la región del Magdalena Medio en el centro-norte de Colombia. “*Colombia: la esquiwa búsqueda de la paz*” p. 4; “La reforma y el asesinato políticos en Colombia: La violencia continúa”, Americas Watch, abril 1992, p.15.

<sup>14</sup> Grupo de Información de Jane, Terrorismo e Insurgencia Mundial de Jane, 14, [www.janes.com](http://www.janes.com), 25 de marzo de 2002.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Departamento de Estado de los EE UU, p. 2.

fuerzas mercenarias de vigilancia, las cuales, en algunas instancias, actuaban como ejércitos privados pagados por los grandes terratenientes o los narcotraficantes.

16. Cerca de la mitad de todo el desplazamiento interno que tiene lugar en Colombia parece ser el producto de las acciones de los paramilitares. Estas acciones se caracterizan por un alto grado de brutalidad, e incluyen la tortura, los asesinatos atroces (por ejemplo, con motosierras de cadena) y las masacres<sup>17</sup>. Normalmente los paramilitares entran a las comunidades con una lista de las personas sospechosas de colaborar con la guerrilla, y de inmediato proceden a su ejecución sumaria. En muchos casos, los asesinatos son aleatorios, lo que infunde aún más miedo en la población. El simple rumor de una posible incursión por parte de un grupo paramilitar, es a menudo suficiente para desatar el desplazamiento. Desde la ruptura del proceso de paz en octubre de 2001, pareciera que las AUC han variado sus tácticas. Las masacres se han reducido, pero el número de asesinatos y desapariciones selectivas en áreas bajo su control ha aumentado<sup>18</sup>. Las AUC también son los principales responsables de la “limpieza social” (para más información referirse a la Sección II, Grupos en riesgo) que se lleva a cabo en el país. A pesar de que las actividades paramilitares son denunciadas oficialmente, se ha informado que, a nivel de terreno, las AUC continúan recibiendo el apoyo de la Fuerza Pública de Colombia, y que algunas veces participan, en sustitución del gobierno, en combates contra las guerrillas.

### **3. La situación de seguridad y de derechos humanos**

17. Desde finales de la década de 1990, la violencia política y el conflicto entre las fuerzas militares, los paramilitares y la guerrilla, así como la actividad de las organizaciones criminales se han incrementado de manera significativa. La situación se caracteriza por la violación masiva y generalizada de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y el número de víctimas de la población civil no cesa de aumentar<sup>19</sup>. Además, la violencia llega con más frecuencia a las zonas urbanas.

18. En el año 2001, el promedio diario de violaciones al derecho a la vida alcanzó la cifra sin precedentes de 20 casos por día. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), entre octubre de 2000 y marzo de 2001, 1.500 ciudadanos perdieron su vida como consecuencia directa del conflicto armado; esto es, más del doble de la cifra de combatientes que murieron durante el mismo período el año anterior. Cerca de la mitad de las víctimas (749) fueron masacradas, la gran mayoría a manos de los grupos paramilitares. Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a secuestros, y también tiene la tasa per capita más alta de homicidios.

19. Los grupos armados (por ejemplo los grupos guerrilleros y los paramilitares) buscan sobre todo a personas y comunidades sospechosas de apoyar, colaborar o ser la base de apoyo del grupo opositor. Las ejecuciones extrajudiciales cobran la forma de asesinatos individuales o en grupo, y entre las víctimas figuran personas de todas las edades y condiciones, incluso niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. Los paramilitares informaron que entre enero y septiembre de 2001 cometieron 102 masacres (671 víctimas), así como varios centenares de

---

<sup>17</sup> Organizaciones de derechos humanos, tales como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), define como masacre “la matanza (casi) simultánea de tres o más personas que se encuentran fuera de combate, ya sea en un solo lugar o en varios lugares cercanos”.

<sup>18</sup> La CCJ atribuye a los grupos paramilitares un total de 1.929 asesinatos “políticos” y 319 asesinatos por “limpieza social”, durante el período de junio de 2000 a junio de 2001.

<sup>19</sup> Como se observa, *inter alia*, en este informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la situación en Colombia, la violencia va en aumento y afecta en forma particular a la población civil, OACNUDH, 28 de febrero de 2002 (E/CN.4/2002/17).



asesinatos selectivos<sup>20</sup>. Existen varios informes de colusión entre miembros de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios de gobierno involucrados en dichos asesinatos o en la impunidad subsiguiente. En relación con las sentencias condenatorias de los oficiales militares (en servicio o jubilados) acusados de cooperar con los grupos paramilitares, se considera que se trata de un expediente mixto. También se señala que los procedimientos penales van acompañados de amenazas a los testigos, a los investigadores y a los jueces.

20. Los observadores sugieren que la mayor incidencia e intensidad de los actos de agresión contra los ciudadanos forma parte de una estrategia deliberada de los grupos armados para extender su esfera de influencia y ganar control territorial. Se considera que en el fondo del conflicto lo que prima es el deseo de controlar posiciones territoriales estratégicas, y esto tiene relación con actividades militares, económicas y de desarrollo, incluida la economía de narcóticos. La mayoría de los observadores coinciden en que, en la actualidad, este aspecto de la crisis afecta a todo el territorio colombiano.

21. La violencia ha afectado, además, a los países vecinos de Colombia. Panamá, cuyo ejército fue desmantelado después de la invasión de los Estados Unidos en 1989, es a veces utilizado como un santuario por los rebeldes de las FARC. Los paramilitares colombianos, en su intento por negarles a las guerrillas un lugar para descansar y rearmarse, han incrementado sus actividades en Panamá. Prueba de ello es el ataque al pueblo panameño de Nazaret, donde los rebeldes de las FARC compraban sus provisiones<sup>21</sup>. Las FARC y el ELN están activos en la frontera con Venezuela, donde compran armas y provisiones, reclutan campesinos y secuestran finqueros adinerados. Existen pruebas de que en Venezuela se están estableciendo grupos paramilitares, al parecer con la ayuda de su contraparte colombiana, para combatir la extorsión y el secuestro de terratenientes a manos de la guerrilla<sup>22</sup>. En marzo de 2001, las FARC admitieron haber entrado al Perú, pero negaron haberse establecido allí permanentemente<sup>23</sup>. Por último, los paramilitares colombianos entraron a Ecuador para atacar los campamentos levantados por las FARC en ese territorio<sup>24</sup>. La presencia de grupos armados colombianos en las zonas fronterizas pone en riesgo la seguridad de que gozan los solicitantes de asilo colombianos en los países vecinos.

22. El patrón de violencia del conflicto armado que afecta a la sociedad colombiana y que amenaza la vida y la seguridad de su ciudadanía, incluye el ataque deliberado a la población civil, la destrucción de las instalaciones militares y policiales que se encuentran en cada comunidad, el asedio y los bloqueos armados, el secuestro, la extorsión y el reclutamiento forzado.

23. **El ataque a la población civil:** Las amenazas y los asesinatos colectivos, así como los ataques directos contra la población civil se atribuyen a todos los actores no estatales, y ocurren sobre todo en aquellas áreas de Colombia que se encontraban en disputa y que recién han sido conquistadas<sup>25</sup>. Tales ataques pueden realizarse de manera indiscriminada, o bien, deliberadamente,

---

<sup>20</sup> Departamento de Estado de los EE UU, Informe de país sobre las prácticas de los derechos humanos 2001, Colombia, p. 7.

<sup>21</sup> *Después del colapso del proceso de paz, la guerra retorna a Colombia*, Jane's Intelligence Review, abril de 2002, p. 12.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Todas las facciones involucradas en el conflicto atacan intencionalmente a los civiles. "Las organizaciones guerrilleras prosiguieron con su estrategia de cometer abusos, rutinariamente, contra la ciudadanía. Sus tácticas incluían, de manera regular, el asesinato, el secuestro, la tortura, el ataque a la población civil y a la infraestructura del país (incluidos los servicios médicos), y el reclutamiento forzado de niños de tan solo 10 años de edad". Departamento de Estado de los EE UU, p. 20.

y su intención es intimidar a la población civil, que es vista como la base social del grupo opositor. Con frecuencia, el desplazamiento es detonado por el temor de la llegada inminente de uno de los grupos armados.

24. **El ataque a los cuarteles militares y de la policía:** Las partes involucradas en el conflicto a menudo realizan ataques desproporcionados contra objetivos militares situados en las comunidades, causando una gran pérdida de vidas humanas. En mayo pasado, 117 personas que se encontraban congregadas en una iglesia de Bojayá, murieron durante un prolongado ataque de las FARC. Un cilindro de gas repleto de explosivos, lanzado contra posiciones paramilitares en el pueblo, cayó en la iglesia. El uso de dichas armas, cuya precisión es prácticamente nula, es una táctica comúnmente empleada por las FARC.

25. **Las comunidades bajo asedio:** Los bloqueos armados impuestos por los grupos irregulares armados, de manera deliberada y por razones estratégicas, en ciertas comunidades y municipalidades, en particular en las áreas fronterizas, restringen el acceso de la población a artículos y servicios básicos, incrementan la malnutrición, provocan la escasez de alimentos y dificultan la obtención de atención médica. Todo lo cual tiene graves consecuencias para la población más vulnerable. En otros casos, la restricción a la libre circulación de bienes y personas es el resultado de la lucha entre la guerrilla y los grupos paramilitares. Prácticamente todas las carreteras de Colombia fueron bloqueada en algún punto durante el año 2001<sup>26</sup>.

26. **El enfrentamiento armado de las partes en conflicto y las minas terrestres:** Los choques armados ponen en peligro la vida de la población civil, y provocan el desplazamiento forzado de los territorios disputados por las partes en conflicto. Según la CCJ, entre octubre de 2000 y marzo de 2001, 20 civiles murieron en medio de algún enfrentamiento (por ejemplo, por fuego cruzado). Las minas terrestres mataron y mutilaron a un número similar de ciudadanos, y afectaron sobre todo a los niños. Se estima que deben haber unas 130.000 minas antipersonales, de las cuales 18.000 fueron dejadas por los militares para defender posiciones fijas. Unas 140 municipalidades se vieron afectadas por los campos minados, cuya extensión era de unos 90.000 millas cuadradas<sup>27</sup>. Miles de desplazados internos (IDP) no pudieron retornar a sus hogares por causa de las minas terrestres.

27. **El secuestro y la extorsión:** Una de las principales características del conflicto colombiano es la alta tasa de secuestros que, en el año 2001, alcanzó la cifra de 3.041 personas, es decir un promedio de 8 por día. Las prácticas de extorsión, incluidos los rescates, los “impuestos de guerra” y otros pagos forzados son comunes. Los principales perpetradores –se afirma– son los grupos guerrilleros (60%); sin embargo, se ha informado que las organizaciones paramilitares también están recurriendo, y cada vez con más frecuencia, a estas prácticas. El secuestro y la extorsión son una forma, no sólo de perseguir a los (supuestos o percibidos) opositores políticos, sino de financiar actividades políticas y militares. Sólo el 10% de los secuestros se atribuyen a motivos puramente criminales, y las FARC a menudo “compran” las víctimas de estos secuestros a las pandillas criminales. Los niños menores también están en la mira, y han habido víctimas de tan solo dos años de edad. Hasta octubre de 2001, se hablaba de una cifra de 205 menores en cautiverio. Además, en el caso de las guerrillas, en particular de las FARC, las víctimas de secuestro son, a menudo, consideradas como capital humano, útil para ser intercambiado por guerrilleros capturados y prisioneros. El gobierno siempre ha rechazado las demandas de dichos “intercambios humanitarios” (excepto una vez en el año 2000). Como resultado, las FARC han llevado a cabo una serie de secuestros de alto perfil, con el propósito de “mejorar sus opciones”. El caso más conocido en el

---

<sup>26</sup> Ibid, p. 25.

<sup>27</sup> Departamento de Estado de los EE UU, p. 19.

ámbito internacional es el de la congresista Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC en febrero pasado mientras se encontraba en plena campaña para la Presidencia. Hasta la fecha, la señora Betancourt permanece en cautiverio. Al parecer las víctimas de secuestro son, con frecuencia, objeto de torturas por parte de las FARC. De los ciudadanos “desaparecidos” (sin demanda de rescate) por los paramilitares nunca se vuelve a saber o son encontrados sin vida.

28. **El reclutamiento forzado:** varios informes internacionales señalan que los grupos guerrilleros y paramilitares se valen del reclutamiento forzado<sup>28</sup>, incluido el reclutamiento de menores de edad. El gobierno colombiano considera que los grupos guerrilleros y paramilitares mantienen en sus filas a unos 6.000 combatientes menores de edad. El Ministro de Defensa ha informado que la cifra de menores que desertan de los grupos irregulares armados se incrementó de forma importante en el 2001, en comparación con los años anteriores (93 en el 2001, 71 en el 2000, y 29 en 1999). El Informe de País del año 2000 del Departamento de Estado de EE UU sobre las Prácticas de Derechos Humanos, señala que una vez que ocurre el reclutamiento, los guerrilleros infantiles son prisioneros virtuales de sus comandantes y objeto de abuso. El abuso sexual de las niñas es un problema especial. Las niñas ex-guerrilleras han testificado sobre estupro y violaciones, el uso obligado del dispositivo intrauterino y los abortos forzados a que son sometidas. Estos mismos abusos han sido denunciados por las mujeres reclutadas de manera forzada<sup>29</sup>. Según los informes de la prensa, por lo menos un tercio de la guerrilla está compuesta por menores de 18 años. Al mismo tiempo, la línea divisoria entre el reclutamiento forzado y el voluntario podría ser confusa en algunos casos. Es importante señalar que el reclutamiento de niños menores de 15 años contraviene, en todos los casos, el derecho internacional<sup>30</sup>.

#### **4. La situación socio-económica y humanitaria**

29. Se estima que la fuerza laboral de Colombia asciende a 18.3 millones de personas, (estimaciones del año 1999), de las cuales el 46% trabaja en el sector servicios, el 30% en el sector rural y el 24% en la industria. El país enfrenta una tasa de desempleo alta y en aumento; de hecho, entre 1994 y el año 2000 el desempleo se duplicó, afectando al 20% de la fuerza laboral, sobre todo a las mujeres y a los jóvenes. De acuerdo con el Perfil de País de la Unidad de Inteligencia del Economist, “esta tendencia obedece al patrón de desarrollo económico en el que las fuerzas motoras del crecimiento son actividades de capital intensivo, como la producción petrolera, y a la caída experimentada, desde 1995, por el sector de la construcción, la cual se debió, en parte, a la represión ejercida sobre los carteles de la droga, quienes, entre 1992 y 1995, financiaron gran parte de la construcción. La escalada en la violencia y los bajos precios de los productos agrícolas también han contribuido a acelerar la migración rural-urbana, aumentando, con ello, el problema del desempleo urbano.”

30. A pesar de que la economía de Colombia es diversa y relativamente avanzada, el país enfrenta serias dificultades, causadas, en su mayor parte por la brecha que existe en la distribución del ingreso y la falta de seguridad ciudadana. En relación con el primer punto, los indicadores económicos del año 2000 señalan que el PIB per cápita era de \$6.200, pero que un 55% de la población vivía en condiciones de pobreza. Con respecto a la falta de seguridad ciudadana, los desplazados internos —un 70% de ellos son mujeres y niños— se encuentran en niveles de pobreza extrema por haber perdido todas sus pertenencias. Los elevados niveles de violencia y la creciente

---

<sup>28</sup> Ver, *inter alia*, Departamento de Estado de los EE UU, p. 20.

<sup>29</sup> Informe de la OACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Colombia del 28 de febrero de 2002 (E/CN.4/2002/17), párrafo. 128.

<sup>30</sup> Ver el Art. 38 de la Convención de los Derechos del Niño, y en particular, el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados.

importancia de la llamada “narco-economía” impiden establecer la confianza en el medio empresarial y se convierten en un factor determinante para los inversionistas. Por otra parte, la destrucción ininterrumpida —producto de un conflicto de casi 38 años— está alcanzando la infraestructura del país, por ejemplo, como las redes de electricidad, los puentes y las fuentes de agua. Estos actos de violencia empañan, aún más, la capacidad del Gobierno para garantizar el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales a través de la prestación de servicios básicos.

## **5. El desplazamiento interno**

31. En Colombia, el fenómeno del desplazamiento interno forzado es de una magnitud enorme, y ha erosionado el entorno social y la economía, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Además, ha causado el empobrecimiento de las personas afectadas. Todos los departamentos de Colombia se han visto perjudicados por este fenómeno, a excepción de las islas de San Andrés y Providencia. Los cinco departamentos que generan más desplazamiento son Antioquia, Magdalena, Cauca, Bolívar y Chocó.

32. Más que un resultado del conflicto armado, el desplazamiento forzado —que no cesa de aumentar— es una estrategia deliberada empleada por la guerrilla y por los paramilitares<sup>31</sup>. Es difícil estimar el número de desplazados, ya que a menudo estas personas no se registran, y algunos de ellos han sido desplazados en muchas ocasiones. Las principales fuentes de información sobre el desplazamiento son la *Red de Solidaridad Social* (RSS), una agencia gubernamental, y CODHES, una organización no gubernamental. Ambas señalaron que el desplazamiento aumentó en el año 2001, en relación con el año anterior. El gobierno estima que unas 275.000 personas fueron desplazadas durante 2001; CODHES estima que el año pasado el número de desplazados ascendió a 347.925. Se estima, además, que el número de personas que han sido desplazadas desde 1996 supera los 1.3 millones; de ellas, el 70% son mujeres y niños<sup>32</sup>.

33. Las causas del desplazamiento son muchas; algunas veces las personas huyen individualmente, en otros casos, lo hacen las familias; en otras ocasiones, toda la comunidad decide huir. En orden de importancia, las causas del desplazamiento interno son: las amenazas colectivas, los enfrentamientos armados (temor a estar en medio de un fuego cruzado), las masacres, las amenazas individuales, los ataques directos a los centros de población, y el deseo de evitar el reclutamiento forzado por parte de los actores irregulares armados<sup>33</sup>. En su último informe sobre el desplazamiento interno, la Defensoría del Pueblo menciona el ataque indiscriminado (en su mayoría por la guerrilla) a las instalaciones y a la infraestructura civiles, como uno de los factores determinantes en el desplazamiento de comunidades enteras, afectadas por el aislamiento económico y las penurias causadas por estos ataques.

34. La gran mayoría de los desplazados proviene de comunidades agrícolas, y estas poblaciones generalmente se reubican sin contar con ningún bien o empleo que sea transferible de un pueblo a otro. Sin embargo, recientemente, el desplazamiento intra-urbano, dentro de la misma ciudad (el mejor ejemplo lo ofrece Medellín) ha comenzado a aumentar, producto de la creciente “urbanización” del conflicto. Esta situación es un reflejo de las disputas por lograr el control de ciertos barrios, del reclutamiento forzado a que recurren las milicias urbanas y del aumento en la red de informantes de los diferentes grupos armados. La expansión del conflicto en todo el país y la

---

<sup>31</sup> Ver Addendum al Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos, Perfiles del desplazamiento: misión de seguimiento a Colombia, E/CN/2000/83/Add.1, enero de 2000.

<sup>32</sup> Departamento de Estado de los EE UU, p. 25.

<sup>33</sup> Red de Solidaridad Social (RSS), enero de 2002.

mayor presencia de actores armados en el entorno urbano, generalmente lleva a las personas desplazadas internas a no registrarse con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de no ser reconocidos por uno u otro de los actores armados presentes en el área. Por otra parte, como las comunidades de acogida no pueden absorber a la gran cantidad de desplazados internos durante un período muy prolongado, los IDP son estigmatizados y discriminados, y se les presiona para que regresen a sus hogares. Existe, por tanto, una aversión a registrarse como IDP, lo que, a su vez, incide en la posibilidad de acceder al mínimo de protección y asistencia disponibles

35. Como se mencionó anteriormente, el desplazamiento afecta sobremanera a las minorías étnicas de Colombia: a los afrocolombianos en las áreas costeras, y a los indígenas en varias partes del país (en particular en Cauca, Putumayo, Sierra Nevada,\* Urabá y Chocó). Asimismo, las áreas dedicadas al cultivo de la coca, sin excepción, provocan el desplazamiento. Además de sufrir penurias económicas (debidas a la carencia de alternativas viables), las poblaciones locales se ven, a menudo, presionadas por la guerrilla, por los paramilitares y por los traficantes de droga, para que se involucren en el cultivo de la coca, pero esto no hace sino aumentar el riesgo de sufrir las consecuencias a manos de alguno de los grupos armados, que los podrían acusar de colaborar con el financiamiento del otro grupo. Por lo tanto, no queda más salida que el desplazamiento. Las personas desplazadas de estas áreas son aún más estigmatizadas que otros IDP, y con frecuencia encuentran dificultades para recibir asistencia humanitaria de parte del Estado<sup>34</sup>.

36. La RSS es la entidad estatal responsable de coordinar las actividades a favor de los IDP. La Ley 387 de 1997, y dos reglamentos más, le dan el marco legal para llevar a cabo actividades relacionadas con la prevención del desplazamiento, así como la protección y la asistencia humanitaria a los IDP. A pesar de que el marco legal y normativo sobre el desplazamiento interno en Colombia es excepcional, y se basa, en gran medida, en los Principios Rectores del Desplazamiento Interno<sup>35</sup>, su implementación, aun con los IDP registrados, está muy atrasada. Este retraso se debe, sobre todo, a la disparidad de recursos disponibles y a la gran cantidad de personas afectadas. Una vez que las personas se han registrado como IDP, los beneficiarios reciben ayuda de emergencia por un período de tres meses, prorrogables a tres meses más. Sin embargo, en la mayoría de los casos, una vez pasado el período de tres meses, no se presta atención a la integración económica y social de los desplazados.

37. En lo que respecta a encontrar una “solución duradera” para los IDP, se puede decir que solamente un 10% de los desplazados registrados regresó a su lugar de origen. De este modo, los desplazados tienden a asentarse en las afueras de las grandes ciudades, hacinados, sin condiciones sanitarias adecuadas, y con un acceso limitado a los servicios de salud, educación y empleo<sup>36</sup>. Las mujeres y las niñas desplazadas son, en general, vulnerables a la violencia doméstica, al abuso y a la explotación sexual. Los casos de desnutrición han aumentado entre los niños desplazados, como también la vulnerabilidad a la explotación sexual<sup>37</sup>. Como prácticamente no existen programas de integración socio-económica, muchas veces se producen fricciones con las comunidades de acogida, y las autoridades locales se ven obligadas a presionar a los desplazados para que regresen a sus hogares, aun cuando las condiciones de seguridad sean precarias.

---

\* Nota del Traductor: Sierra Nevada de Santa Marta.

<sup>34</sup> La RSS considera que el desplazamiento causado por las fumigaciones no cae dentro de lo estipulado en la Ley 387, que regula la asistencia a los desplazados internos.

<sup>35</sup> Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, extracto del documento E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998.

<sup>36</sup> De acuerdo con la Oficina de la Defensoría del Pueblo, solamente el 15% de los niños desplazados internos tuvieron acceso a la escuela en el año 2000. Por su parte, CODHES estima que sólo el 34% de los hogares desplazados tuvieron acceso a servicios de salud.

<sup>37</sup> Departamento de Estado de los EE UU, p. 26.

38. En relación con la protección de los desplazados internos y la prevención del desplazamiento interno, aunque ha habido progreso en áreas tales como documentación y registro, en general, se puede decir que los resultados concretos han sido pocos, sobre todo si se compara con la magnitud del problema. Es más, el control estatal efectivo es prácticamente nulo en grandes áreas del país<sup>38</sup>, haciendo que términos como “protección” y “prevención” se conviertan en utopías difíciles de alcanzar. La Fuerza Pública (el ejército y la policía) es la única institución que tiene la competencia necesaria para responder a un desplazamiento inminente, y, sin embargo, ellos mismos aducen falta de recursos o responsabilidades estratégicas diferentes para explicar su incapacidad para actuar. Es más, la intervención de la Fuerza Pública puede llevar a una escalada en los problemas de seguridad, ya que, ante su eventual retirada, la población civil quedaría indefensa y enfrentaría las consecuencias, a manos de las fuerzas armadas ilegales, de haber llamado “al enemigo”.

### **III. Grupos en riesgo**

39. En vista de la situación de conflicto permanente, de abuso masivo y generalizado de los derechos humanos, y de violación del derecho internacional humanitario, un gran número de colombianos cruzan las fronteras internacionales en busca de protección internacional. Muchos colombianos tienen temores fundados de persecución por motivos establecidos en el Artículo 1 A (2) de la Convención de Ginebra de 1951 y en el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, y un gran número de ellos requiere protección, porque su vida, su seguridad y su libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada u otras circunstancias que perturban gravemente el orden público<sup>39</sup>.

40. Es importante que las decisiones que se tomen con respecto a la condición de refugiado de los colombianos que solicitan asilo se basen en un análisis detallado de las circunstancias individuales de cada caso, tales como, el perfil personal del solicitante, sus antecedentes familiares, sociales y étnicos, su participación o colaboración (supuesta o real) en un grupo político o social, y el tipo de actividades llevadas a cabo. Dentro del marco de violación generalizada de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, es claro que ciertos grupos son objeto de ataque con más frecuencia que otros. Para poder evaluar a estos grupos en riesgo, es necesario contar con información confiable y actualizada sobre el país de origen.

#### **A. Colombianos con temores fundados de persecución por motivos establecidos en el artículo I A de la Convención de 1951<sup>40</sup>**

##### **1. Introducción**

41. Según el Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el término “refugiado” se aplica a cualquier persona que “debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. Por lo tanto, en cada caso individual es necesario determinar cuatro elementos principales: (a) el temor fundado (elemento subjetivo y objetivo), (b) la

---

<sup>38</sup> De las 1.098 municipalidades que existen en Colombia, 200 no cuentan con seguridad estatal. Ver AFP, 1° de agosto de 2002, "Rebeldes colombianos liberan a niña de tres años, hija de alcalde amenazado".

<sup>39</sup> Ver, por ejemplo, Conclusión III de la Declaración de Cartagena de 1984 sobre los refugiados.

<sup>40</sup> En aquellos países que han adoptado la Declaración de Cartagena, estas personas caerían dentro del ámbito de la Declaración.

persecución, (c) los motivos de raza, religión, nacionalidad, adhesión a un grupo social particular o a una opinión política particular, y (d) la presencia de la persona fuera de su país de origen<sup>41</sup>.

42. El tamaño del grupo afectado no es relevante para la interpretación adecuada del Artículo 1. El hecho de que comunidades enteras corran el riesgo de ser perseguidas, o se les persiga, por motivos relacionados con la Convención, no afecta la legitimidad de ninguna solicitud. Durante una guerra o un conflicto, las personas pueden verse obligadas a abandonar sus hogares en razón de un temor fundado de persecución, según lo establece la Convención. La guerra y la violencia mismas son, a menudo, utilizadas como instrumentos de persecución; ambas suelen ser los medios escogidos por los perseguidores para reprimir o eliminar a un grupo o a varios grupos específicos, los cuales son acosados en virtud de la opinión política o de la afiliación que sostienen o que se les imputa<sup>42</sup>. En el contexto colombiano, las solicitudes de asilo que hacen referencia a la violencia generalizada y a la inseguridad suelen ser presentadas por individuos que han sobrevivido a ataques deliberados —a menudo relacionados con lo estipulado en la Convención—, a la violencia indiscriminada contra la población civil por parte de algún grupo armado, o a los combates armados entre los actores armados. Otras personas abandonan sus comunidades por razones preventivas antes de que el ataque tenga lugar. Muchas de las solicitudes de asilo de los colombianos que se refieren a amenazas contra su vida, su seguridad o su libertad, debido a la violencia generalizada o de las violaciones masivas de los derechos humanos podrían, por tanto, caer en el ámbito de la Convención de 1951.

43. Con respecto a los agentes de persecución, cabe señalar que, según lo establecido en el párrafo 65 del Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado, “la persecución suele ser resultado de la actuación de las autoridades de un país. Puede también emanar de sectores de la población que no respetan las normas establecidas por las leyes de su país (...). El comportamiento vejatorio o gravemente discriminatorio observado por ciertos sectores de la población local puede equipararse a la persecución si es deliberadamente tolerado por las autoridades, o si éstas se niegan a proporcionar una protección eficaz o son incapaces de hacerlo.” En el contexto colombiano actual, los actos antes señalados llevados a cabo por los actores armados (o atribuibles a ellos) podrían, por tanto, ser considerados como actos de persecución, según la definición de refugiado que incluye la incapacidad del Gobierno de proteger a sus ciudadanos. Los párrafos que siguen describen el perfil de varios grupos de colombianos que, de conformidad con la información actual y disponible, y según el criterio del ACNUR y las circunstancias individuales de cada solicitante, podrían ser objeto de persecución por los motivos estipulados en el Artículo 1 A (2) de la Convención de 1951 y en el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.

## **2. Las personas que apoyan o se presume que apoyan a las partes en conflicto**

44. En virtud de la polarización extrema que se vive en Colombia, los grupos irregulares armados atacan a toda persona que consideren aliada del grupo contrario, sin importar si dicha colaboración es real o imputada, forzada o voluntaria. En las áreas que están bajo el control de alguno de los grupos armados, los civiles se ven, a menudo, obligados a apoyar a dicho grupo para evitar la persecución. Muchas veces, el simple lugar de residencia es motivo suficiente para

---

<sup>41</sup> Para una guía más detallada sobre los criterios, su interpretación y su aplicación se recomienda consultar los siguientes documentos: Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado, ACNUR, 1979; Notas del ACNUR sobre la Interpretación de la Definición de Refugiado y sobre Formas Complementarias de Protección, IOM/FOM/38/2001 del 1 de mayo de 2001; la publicación de ACNUR sobre la “Reubicación Interna como una Opción Razonable para la Solicitud de Asilo – (La llamada “Alternativa de huida interna” o “Principio de Reubicación”).

<sup>42</sup> “Interpretando el Artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados”, nota del ACNUR, abril de 2001, párrafo 20.

despertar las sospechas en uno u otro grupo armado. Por ejemplo, quienes provienen de una de las cinco municipalidades (Vista Hermosa, Uribe, Macarena y Mesetas, en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán en Caquetá) que hasta febrero de 2002 constituían la *Zona de Despeje*, corren el riesgo de ser vinculados con la guerrilla.

45. Los familiares de los miembros de las partes en conflicto suelen estar en la mira de los ataques de los grupos irregulares, sin importar que se trata de civiles, en razón de su parentesco y de la percepción de que sus opiniones políticas son las mismas que las de sus familiares, que todos son informantes, o, simplemente, por razones de venganza.

46. Quienes se niegan al reclutamiento forzado o abandonan la guerrilla o las fuerzas paramilitares corren el riesgo de ser perseguidos por el grupo que desea reclutarlos, en razón de una supuesta colaboración con el enemigo. A su vez, el grupo contrario desestima la naturaleza forzada del reclutamiento y considera que todos los reclutas aprueban la opinión política del grupo que los reclutó.

47. La guerrilla, y en menor grado, pero cada vez con más frecuencia, los paramilitares secuestran y/o extorsionan a todo aquel que consideren que tiene una opinión política diferente a la suya. También recurren a estas prácticas para financiar objetivos político-militares, y, por ello, hacen blanco de sus ataques a los ciudadanos de las clases media y alta, a quienes tienen algún tipo de negocio, y en general, a todo aquel que perciban como una posible fuente de ingresos. En vista de lo importante que resulta el ingreso que se deriva del rescate o de la extorsión, rehusarse a pagar o declararse incapaz de pagar es visto como un acto o un indicio de oposición política. Esto se refleja en las cartas escritas por los paramilitares, demandando que se les pague un “impuesto de guerra” y amenazando considerar a las víctimas como un blanco paramilitar, si no acceden a pagar<sup>43</sup>.

### **3. Los antiguos miembros de las partes en conflicto**

48. La violencia se ejerce con particular crueldad contra los miembros de la guerrilla que se han “desmovilizado” y “reinsertado”. Luego de las negociaciones de paz sostenidas entre 1990 y 1994, unos 7000 miembros de grupos guerrilleros como el M-19, el EPL, el *Quintín Lame* y la *Corriente de Renovación Socialista* (CRS) recibieron la amnistía por crímenes políticos, y se les concedieron beneficios económicos. Sin importar que se trata de civiles, estas personas son consideradas como traidores y colaboradores, tanto por el grupo que abandonaron como por los otros grupos guerrilleros<sup>44</sup>. Es más, son perseguidos por los grupos paramilitares, que los acusan de mantener actividades guerrilleras. Quienes han formado parte de las fuerzas de seguridad (los oficiales retirados de la policía y del ejército y los reservistas), también corren el riesgo de ser considerados por la guerrilla como un blanco militar, incluso después de que han sido dados de baja.

49. Por último, el riesgo más alto lo corren los miembros de la Unión Patriótica, movimiento político creado en 1985 como resultado del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno. El acuerdo de paz finalmente no prosperó, pero el movimiento continuó vigente. Aunque no necesariamente eran ex-guerrilleros, los miembros de la Unión Patriótica eran, ideológica y políticamente, cercanos a las FARC. Entre 1985 y 1990, cerca de 3.000 miembros fueron asesinados. Por consiguiente, la Unión Patriótica ya no ejerce la política en forma activa. A pesar de un programa de protección iniciado por el Gobierno en el 2001, cerca de 100 miembros fueron asesinados en los dos últimos años.

---

<sup>43</sup> Departamento de Estado de los EE UU, p. 13.

<sup>44</sup> Ver informe de la OACNUDH, párrafo 312.



#### **4. Las autoridades municipales y departamentales**

50. Las amenazas contra las autoridades locales son frecuentes a lo largo y ancho del país. La precaria situación de los *alcaldes*, de los *concejales* y de otras autoridades municipales ilustra la debilidad del Gobierno. Aproximadamente una quinta parte (unas 200 de 1098) de las municipalidades de Colombia carecen de fuerzas de seguridad gubernamentales (ejército o policía). En muchas de las municipalidades más pequeñas, la escasa presencia policial no es garantía contra las amenazas de los actores ilegales armados. Las FARC, por ejemplo, ven a todos los miembros del Gobierno como representantes de un régimen opresivo contra el que cualquier medio es justificable en su lucha revolucionaria, incluidos el secuestro y el asesinato de sus familiares<sup>45</sup>. Además, se sabe de casos en los que las FARC han dirigido los gastos municipales o exigido “impuestos” sobre el presupuesto municipal.

51. En mayo de 2002, las FARC lanzaron una campaña concertada de intimidación y amenazas contra las autoridades locales, como parte de una estrategia dirigida a minar la autoridad del Gobierno y a desestabilizar el país. De acuerdo con el Ministro del Interior, más de trescientos alcaldes<sup>46</sup> de la mayoría de los Departamentos han recibido amenazas directas, y muchos trabajan en forma encubierta o conducen los asuntos de su oficina desde municipalidades diferentes. Las FARC han emitido varios comunicados en los que señalan que todas las autoridades departamentales y municipales del país son un blanco militar. Durante los últimos cinco años, sesenta alcaldes (es decir, uno por mes) han sido asesinados en Colombia.

#### **5. Las personas relacionadas con la administración de justicia**

52. Los fiscales, los jueces, las víctimas, los testigos, y otras personas que participan en los procesos e investigaciones relacionados con las violaciones a los derechos humanos o al derecho humanitario, en los que aparecen implicados los miembros de la fuerza pública, los grupos paramilitares o los guerrilleros, corren grave peligro<sup>47</sup>. En todos estos casos debe considerarse el temor de persecución fundado en razón de la opinión política imputada. Quienes investigan casos de corrupción y casos en los que aparecen implicados grupos de narcotraficantes corren el mismo peligro, y en algunos casos su situación también se encuentra vinculada a lo establecido en la Convención de 1951, en virtud de que tales casos suelen estar estrechamente ligados a actividades subversivas o paramilitares. Por último, los miembros del Poder Judicial enfrentan cada vez más amenazas de parte de las FARC por el simple hecho de ser funcionarios públicos (ver sección anterior). En muchos casos, la persona “señalada” no logra escapar a la persecución, aun cuando renuncie a su cargo y busque otro trabajo.

53. El ámbito y la eficacia del programa de protección de la Fiscalía, para las víctimas, testigos y demás personas involucradas en los procesos penales, así como el propio personal de la Fiscalía, no alcanzan a proteger a las personas de las amenazas. Es más, no existe ningún programa específico de protección para los funcionarios del Poder Judicial que trabajan en oficinas distintas a la Fiscalía, por ejemplo, para los que trabajan en los municipios. La falta de una protección efectiva

---

<sup>45</sup> Ver comunicados de prensa, *inter alia*, el de AFP, 1° de agosto de 2002.

<sup>46</sup> Hasta el 18 de julio de 2002, y se espera que el número continúe creciendo.

<sup>47</sup> Según el informe del 2002 de la OACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, el Fondo de Solidaridad para los Funcionarios del Poder Judicial registró 81 ataques a jueces, incluidos al menos 15 asesinatos, 58 amenazas, un asalto, dos desapariciones y cinco secuestros entre el 1° de enero y el 14 de diciembre del 2001 (E/CN.4/2002/17, párrafo 254). Además, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, los jueces y los funcionarios judiciales de 231 municipalidades han sido objeto de amenazas y han abandonado su trabajo como consecuencia de esta situación.

para éste y otros grupos se refleja en las diferentes instancias en que el Ministerio del Interior ha financiado viajes al exterior a quienes se encontraban en una situación de riesgo.

## **6. Los activistas de derechos humanos**

54. En estos momentos, una nutrida y variada comunidad no gubernamental de derechos humanos, dotada de un alto grado de organización y coordinación, y con redes informativas en todo el país, investiga y reporta las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Como a estas organizaciones se les imputar tendencias "izquierdistas", existe la visión estereotipada de que muchas organizaciones de derechos humanos están vinculadas a la guerrilla, y, por lo tanto, son un blanco seguro. En los últimos cinco años, por lo menos 48 personas que trabajaban en derechos humanos fueron asesinadas o "desaparecidas". De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, sólo en el 2001, fueron asesinados nueve defensores de los derechos humanos; además, cuatro personas que trabajaban en derechos humanos desaparecieron. Muchos otros se han visto obligados a abandonar el país por razones de seguridad<sup>48</sup>. Es más, en términos generales, estas organizaciones abogan por una paz negociada para poner fin al conflicto interno de Colombia. Y, en el actual clima político, en el que se rehuye una paz negociada en favor de una respuesta militar, la posición de los activistas de derechos humanos se ha tornado aún más vulnerable ante los ojos de los paramilitares, quienes han visto aumentar su influencia y el apoyo popular. Esta tendencia de abusos graves a los defensores de los derechos humanos, que incluye amenazas, desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados, en su mayoría (pero no exclusivamente) a manos de los paramilitares, fue confirmada en el Informe de marzo de 2002 del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos<sup>49</sup>.

55. Aunque el Gobierno normalmente no interfiere con el trabajo de las ONG de derechos humanos, el Informe de País del Departamento de Estado de los EE UU sobre Prácticas de Derechos Humanos en Colombia en el 2001 hace referencia a informes (no confirmados) de acoso o amenazas de parte de las fuerzas de seguridad<sup>50</sup>. El gobierno cuenta con un programa de protección, establecido en el Ministerio del Interior, y con el Servicio de Inteligencia Colombiano (DAS), para proteger a los defensores y activistas de los derechos humanos. Si bien el gobierno ha realizado esfuerzos en este sentido, el elevado número de violaciones es muestra clara de la arriesgada situación en que se encuentra la comunidad de derechos humanos, y señala, además, la incapacidad del gobierno de destinar recursos adecuados, dado el incremento observado en el número de amenazas<sup>51</sup>.

## **7. Los líderes sindicales**

56. Los líderes sindicales corren el riesgo de ser perseguidos sobre todo por los paramilitares, en virtud de sus "simpatías izquierdistas", o de sus supuestos vínculos con la guerrilla. Los actores armados sospechan de cualquier organización civil que se interese en los derechos colectivos, y consideran este tipo de iniciativas como una amenaza a su influencia y al control que ejercen sobre la población civil. (Ver también "Personas con un alto perfil público/comunitario".) De acuerdo con el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Defensores de

---

<sup>48</sup> Departamento de Estado de los EE UU, p. 28.

<sup>49</sup> E/CN.4/2002/106/Add.2, 28 de marzo de 2002.

<sup>50</sup> Departamento de Estado de los EE UU, p. 28.

<sup>51</sup> De acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), las peticiones de protección recibidas por el Ministerio del Interior y la Comisión Ad Hoc de Defensores de los Derechos Humanos aumentaron en un 130 % en el 2001.

Derechos Humanos, los sindicatos más afectados son aquellos que representan la educación, la salud y a los trabajadores municipales y departamentales<sup>52</sup>.

57. El Informe del 2002 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia señala que las amenazas y la vulnerabilidad que acompañan a la actividad sindical afectan, por igual, a los dirigentes sindicales y a los miembros de los sindicatos<sup>53</sup>. El Representante Especial del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la cooperación con Colombia, considera que ha habido "un aumento en el número de dirigentes y miembros sindicales asesinados"<sup>54</sup>. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la OIT atribuyen la inmensa mayoría de los crímenes y los ataques a los grupos paramilitares<sup>55</sup>.

## **8. Las personas con un alto perfil público/comunitario**

58. Las personas con un alto perfil público/comunitario, relacionado con algún tipo de liderazgo o participación comunitaria, por ejemplo, los sacerdotes, los maestros y los dirigentes de los IDP, sobre todo los de las comunidades indígenas y afrocolombianas, están en la mira de la guerrilla y los paramilitares. En general, algunos de estos dirigentes abogan por los derechos de sus comunidades, piden que se respeten los principios del derecho internacional humanitario, y, frecuentemente, promueven la neutralidad o la imparcialidad de su comunidad frente a los actores armados. Todo esto es causa suficiente para despertar las más fuertes sospechas ante los ojos de dichos actores, los cuales, normalmente, acusan a los presuntos dirigentes de colaborar con el grupo contrario.

59. Son pocos los casos en los que los dirigentes indígenas presentan solicitudes de asilo, pero éstas deben tomarse con extrema seriedad. Aunque no se tienen datos estadísticos oficiales, según varias fuentes, se estima que 102 dirigentes indígenas han sido asesinados desde comienzos del 2001. Los dirigentes indígenas cumplen un papel fundamental en sus comunidades, no sólo en los aspectos religiosos, sino en los culturales. El asilo, entonces, es visto como un recurso extremo, pues significa renunciar a su posición y a su identidad de dirigentes, así como romper con su comunidad. Para ellos dejar sus territorios y comunidades implica un tremendo impacto en el tejido social de su comunidad, así como un profundo impacto psicológico para ellos mismos.

60. Con respecto a las líderes femeninas, el Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer señala: "las organizaciones de la mujer, sobre todo campesinas, indígenas y afrocolombianas, y sus dirigentes, han sido objeto de intimidación sistemática y se han visto perseguidas por la labor que realizan en defensa y en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades. Sus miembros no son los únicos que se ven directamente afectados. Sus hijos y los esposos o compañeros de estas mujeres han sido también asesinados debido a las actividades sociales y políticas de la mujer. Tal es el caso de ONG como la Organización Femenina Popular (OFP), la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) y la Fundación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP). En su afán de lograr el control social y político de territorios en disputa, los grupos armados la emprenden contra las organizaciones de la mujer por considerarlas un obstáculo visible

---

<sup>52</sup> E/CN.4/2002/106/Add.2, 28 de marzo de 2002, párrafo 108.

<sup>53</sup> E/CN.4/2002/17 párrafo 291.

<sup>54</sup> OIT, Tercer Informe del Representante Especial del Director General para la Cooperación con Colombia (GB/281/7/1, p.4).

<sup>55</sup> De acuerdo con la Escuela Nacional Sindical (ENS), un total de 184 activistas sindicales fueron asesinados en el 2001, 23 sobrevivieron a los atentados realizados contra sus vidas, 203 recibieron amenazas de muerte, 37 fueron secuestrados, 12 desaparecieron y 56 fueron obligados a trasladarse a la fuerza. Es más, según el Ministerio de Trabajo, 88 activistas sindicales fueron asesinados en los primeros seis meses del 2002.

profundamente arraigado en las comunidades, a las que tratan de utilizar para su beneficio propio o, de lo contrario, tratan de destruirlas. Las organizaciones que no se pliegan a los intereses de estos grupos se ven obligadas a llevar a cabo sus actividades en condiciones de inseguridad permanente y se ven cada vez más obligadas a abandonar o a transformar los métodos de trabajo de su organización”<sup>56</sup>.

61. Los dirigentes de los IDP enfrentan riesgos cada vez mayores, sobre todo en las comunidades de retorno de Urabá (Norte de Antioquia y el Chocó), que se han organizado en *comunidades de paz*. Un elemento fundamental en tales comunidades es haberse proclamado neutrales. Al igual que ocurre con los indígenas, esta posición tiene un efecto contrario a los ojos de los actores armados, quienes ven a estas comunidades, y sobre todo a sus dirigentes, como sospechosos. Son muchos los dirigentes de los IDP que han desaparecido o que han muerto asesinados, como ocurrió a finales del 2001 cuando dos dirigentes fueron asesinados en Urabá. La vulnerabilidad de los IDP ha sido reconocida por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De particular importancia resultan una serie de medidas provisionales ordenadas por la Corte con respecto a la protección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

## **9. Los periodistas**

62. Los periodistas de todos los medios, nacionales, regionales y locales, cumplen una función clave en la sociedad colombiana, en la medida en que contribuyen a formar la opinión pública con respecto al conflicto, investigan y denuncian los casos de corrupción y narcotráfico, y dan a conocer las violaciones a los derechos humanos cometidas por las partes en conflicto. Este papel ha expuesto a los periodistas que cubren historias contrarias a los intereses de la guerrilla, de los paramilitares y de los traficantes de drogas, a la intimidación, la amenaza, el secuestro y el asesinato, sobre todo a manos de los grupos paramilitares y la guerrilla, en virtud de su opinión política, real o imputada. En consecuencia, el periodismo y los medios tienden a practicar la autocensura con respecto a estos temas para evitar cualquier represalia<sup>57</sup>.

63. En principio, el gobierno respeta la libertad de prensa, y, en general, los medios pueden expresar sus puntos de vista, incluidas las críticas antigubernamentales, sin temor a represalias. No obstante, se han dado casos de amenazas contra periodistas que han informado sobre casos de corrupción que involucraban a funcionarios públicos locales. El programa para la protección de los periodistas y los comentaristas sociales lanzado por el gobierno en el 2000 no ha logrado mejorar la seguridad de los periodistas y de los responsables de los medios.

## **10. Los indígenas y los afrocolombianos**

64. Se ha producido un incremento significativo en las violaciones contra los derechos humanos de los indígenas y los afrocolombianos, especialmente respecto de asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y desplazamientos en las áreas rurales. Estos dos grupos combinados representan aproximadamente un 18% de la población total, pero comprenden una tercera parte de

---

<sup>56</sup> Ver Informe de la Relatora Especial, Sra. Radhika Coomaraswamy, sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, presentado de conformidad con la resolución 2001/49, párrafos 90-91 de la Comisión de Derechos Humanos.

<sup>57</sup> De acuerdo con el Informe de la OACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de febrero de 2002 (E/CN.4/2002/17), el número de periodistas asesinados aumentó de 6 a 9 en el 2001, mientras que el número de personas que recibió amenazas pasó de 27 a 51, en relación con el año 2000.

los IDP<sup>58</sup>. Se ha informado, además, de numerosos casos de indígenas que deben pedir permiso a los paramilitares o a las FARC para poder salir de su comunidad, o cuya libertad de movimiento se ha visto limitada por los bloqueos que practican los paramilitares, o porque, al regresar de una zona urbana, la guerrilla los culpa de colaborar con los paramilitares<sup>59</sup>. El sufrimiento de las comunidades indígenas desplazadas es particularmente agudo por el gran apego histórico, cultural y religioso que sienten por su tierra. Las comunidades indígenas, y en particular sus dirigentes, son a menudo, objeto de persecución debido a su deseo expreso de permanecer neutrales. El aislamiento y la lejanía de los territorios indígenas los hace particularmente atractivos para los actores armados, quienes los utilizan como “corredores” de armas y de tráfico de drogas, así como para el cultivo de la coca y la amapola. Lo que es más, aun cuando se admite que los recursos naturales de Colombia se encuentran mayormente concentrados en las reservas indígenas y en los territorios reclamados, los terrenos de los indígenas, al igual que los de los afrocolombianos, suelen carecer de títulos legales, por lo que fácilmente pueden perderlos con el desplazamiento.

## **11. Personas que pertenecen a grupos sociales marginados**

65. En las áreas que están bajo el control de alguno de los grupos irregulares armados, se ha informado de serios abusos y asesinatos en contra de drogadictos, prostitutas, mendigos, niños de la calle y homosexuales. Las AUC, en particular, pero también las guerrillas, etiquetan a estos grupos como “indeseables sociales”. Frecuentemente, las campañas<sup>60</sup> de “limpieza social” resultantes son apoyadas, de manera tácita, por algunos segmentos de las comunidades locales, y, al igual que las muertes políticas, suelen cometerse con total impunidad. En el caso de la AUC, este tipo de acción suele ir acompañada de una mampara de protección para los dueños de tiendas y los comerciantes.

### **B. Los colombianos que requieren protección internacional debido a la falta o carencia de protección nacional.**

66. Hay casos en los que la condición de refugiado, bajo la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, podría denegarse; sin embargo, hay personas que, en todo caso, podrían necesitar algún tipo de protección internacional, en virtud de la situación de violencia generalizada y conflicto interno que vive su país. De hecho, muchos gobiernos ofrecen la opción de una estadía prolongada en reconocimiento a esta necesidad de protección. En términos generales, se entiende que esto cubre a toda persona que se encuentre fuera de su país y que necesite protección internacional, porque en su país de origen su vida, su libertad y su seguridad corren peligro, como es el caso de quienes se ven amenazados por el solo hecho de estar expuestos a las consecuencias indiscriminadas de la violencia generalizada y el desorden público que surgen en una situación de conflicto. Los instrumentos regionales para los refugiados de África y América Latina<sup>61</sup>, afirman, específicamente, que la protección a los refugiados también comprende a esta categoría “más amplia” de refugiados. En otras regiones, en ausencia de tales instrumentos, los Gobiernos conceden “estadías prolongadas”, según lo establecido en la legislación local.

67. En vista de la situación actual, el ACNUR considera que los colombianos que no pueden regresar a su país, porque su vida y su seguridad corren peligro, en virtud de los efectos indiscriminados de la violencia generalizada y el desorden público, son personas que requieren

---

<sup>58</sup> Departamento de Estado de los EE UU, p. 26.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid, que alude a la escalada en el número de casos de “limpieza social”, p.10.

<sup>61</sup> Dichos documentos son la Convención de la OAU por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África (1969), y la Declaración de Cartagena sobre los refugiados en América Latina (1984).

protección internacional. A raíz de la escalada en la violencia y en razón de la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en todo el territorio, esta afirmación es válida para todos los colombianos que vivan en una zona del país que se encuentre expuesta a una situación conflictiva grave, que esté siendo disputada por varios grupos armados, o en la que se hayan reportado ajusticiamientos fuera de la ley o reclutamientos forzados de parte de las organizaciones armadas. Los colombianos también huyen para escapar de ataques anunciados. Debido a la rapidez de la expansión del conflicto, es importante que quienes tramitan las solicitudes de asilo procuren estar al tanto de la situación que afecta a cada una de las áreas relevantes, sobre todo a las regiones que no se mencionan específicamente en esta publicación. Entre las fuentes que pueden proporcionar dicha información están: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, el Grupo Internacional Crisis, y las distintas organizaciones no gubernamentales locales a las que se ha hecho referencia en estas guías.

#### **IV. Las cláusulas de exclusión**

68. En virtud del contexto descrito, de violaciones graves y generalizadas del derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, y al aumento en la criminalidad común, en algunos casos será necesaria la evaluación cuidadosa de la aplicabilidad de las cláusulas de exclusión contenidas en el Artículo 1 F de la Convención de 1951. Esta cláusula contempla la exclusión de cualquier persona respecto de la cual haya motivos fundados para considerar que se aplica una o varias de las siguientes causales:

- a) Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra, o un delito contra la humanidad
- b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitido en ese país como refugiada
- c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.

69. Las violaciones al derecho internacional humanitario ("los delitos de guerra") contempladas en el párrafo a) incluyen el asesinato o el maltrato a la población civil y a los prisioneros de guerra, el asesinato de rehenes, la destrucción deliberada de ciudades, pueblos y comunidades, y la devastación sin fines militares justificados. Otros actos que se identifican como delitos o crímenes de guerra son las "violaciones graves" especificadas en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y en el Protocolo Adicional 1, y que incluyen el asesinato, la tortura y el maltrato premeditados, el daño premeditado a la salud o al cuerpo, los ataques indiscriminados contra la población civil o contra quienes se encuentran fuera de combate, y el traslado forzado de la población.

70. Para que la exclusión se justifique, es necesario establecer la responsabilidad individual en relación con alguno de los delitos cubiertos por el Artículo 1F de la Convención de 1951. Una exención de la responsabilidad individual es, por ejemplo, la coacción. Esto aplica en aquellos casos en que los individuos no pueden oponerse o librarse de los actos criminales sin poner en grave peligro su vida y la de sus familiares. En el contexto de Colombia, debe recordarse que el reclutamiento forzado, incluido el de menores, es una práctica generalizada, tanto entre la guerrilla como entre los paramilitares. Del mismo modo, frecuentemente, los civiles se ven obligados a proporcionar apoyo material y/o logístico (dinero, alimentos, medicinas, información, etc.) a los grupos armados ilegales, sobre todo cuando viven en áreas consideradas como baluartes de estos grupos. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta la posible naturaleza involuntaria de estos actos. Es más, con respecto al Artículo 1F (b), no está de más recordar que los agricultores se ven, a menudo, obligados por una de las partes en conflicto a dedicarse al cultivo de la coca o de la amapola.

71. Por último, es importante señalar que los familiares de un individuo excluido, podrían tener sus propias razones para solicitar la condición de refugiado, incluida su relación con el familiar excluible, lo que podría dar pie a que se les concediera protección internacional.

## **V. Alternativa de huida interna**

72. Hay circunstancias en las que el solicitante de asilo corre el riesgo de ser perseguido (por los motivos estipulados en la Convención) en ciertas áreas de su país y en otras no. Cuando este es el caso, la evaluación de la petición debe contemplar la posibilidad de una huida interna. De acuerdo con el párrafo 91 del Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado del ACNUR, “el temor de ser perseguido no siempre ha de referirse a la totalidad del territorio del país de la nacionalidad del refugiado. En los conflictos étnicos y los graves disturbios que entrañan una situación de guerra civil, la persecución de un grupo étnico o nacional determinado puede darse sólo en una parte del país. En tales situaciones, una persona no quedará excluida de la condición de refugiado simplemente porque podía haber buscado refugio en otra parte del mismo país si, a la luz de todas las circunstancias del caso, no hubiera sido razonable contar con que así lo hiciera”.

73. Ya sea que la alternativa de huida interna exista o no, es necesario evaluar objetivamente la situación de aquellas partes del país de origen “consideradas como seguras”. Entre los factores que se deben contemplar están:

- ◆ la existencia de áreas libres de riesgo
- ◆ la estabilidad del área y la durabilidad de la seguridad
- ◆ la accesibilidad del área segura (al interior del país y fuera de éste)
- ◆ la posibilidad de vivir en el área sin tener que soportar penurias o riesgos excesivos.

74. Partiendo de estos criterios, el ACNUR generalmente no aconseja la aplicación de la alternativa de huida interna en el contexto actual de Colombia, el cual se caracteriza por:

- ◆ el conflicto permanente, que es, además, sumamente volátil y fluido, y que está alcanzando las zonas urbanas;
- ◆ la incapacidad de las autoridades colombianas de extender su poder y su autoridad, en cuanto a seguridad y aplicabilidad de la ley, en áreas significativas del país;
- ◆ la falta de un sistema administrativo y judicial funcional y confiable;
- ◆ la violación generalizada de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario;
- ◆ la destrucción de la infraestructura socioeconómica y el desplazamiento interno generalizado;
- ◆ el hecho de que los grupos ilegales armados hayan establecido redes de comunicación sumamente eficaces y puedan rastrear, y alcanzar a sus "objetivos" en cualquier parte del país.

75. En conclusión, al ponderar si el temor de persecución u otras amenazas, contra la vida y la libertad, que experimentan los colombianos, se pudieran evitar, de manera razonable y exitosa, mediante el traslado a otras zonas del país, los funcionarios que toman las decisiones deben valorar todas las circunstancias del caso, teniendo presente como antecedente la situación actual descrita. Además, no se debe olvidar el riesgo que supone trasladarse de un sitio a otro, como tampoco el hecho de que Colombia alberga una gran cantidad de IDP que viven en condiciones lamentables, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. En términos generales, se aconseja a los encargados

de la toma de decisiones no aplicar la noción de alternativa de huida interna al estudiar las solicitudes de protección internacional relacionadas con Colombia.

**ACNUR, Ginebra, Septiembre de 2002**

**Traducido por la Unidad Legal Regional, San José, Costa Rica**



## VI. Anexo

